

MEMORIAL SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS DE MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO DE CLINICA PUTUMAYO S.A.S. contra ARL SURA SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SOAT Radicado 2020-0078

Juan Osorio <juancosoma@hotmail.com>

Mié 20/01/2021 10:36 AM

Para: Juzgado 02 Promiscuo Municipal - Putumayo - Puerto Asis <jcmpal02ptoasis@notificacionesrj.gov.co>

 1 archivos adjuntos (168 KB)

REQUERIMIENTO MEDIDA CAUTELAR CLINICA PUTUMAYO VS ARL SURAMERICANA DE RIESGOS LABORALES.pdf;

Doctor

JULIO CESAR RIASCOS TORRES

JUEZ SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE PUERTO ASIS

E. S. D.

Asunto: Proceso Ejecutivo Singular de la **CLINICA PUTUMAYO S.A.S.** contra **ARL SURA SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SOAT**
RADIC. - 2020-00078-00

JUAN CARLOS OSORIO MANRIQUE, actuando como apoderado judicial de la entidad demandante de la referencia, con el debido respeto me permito allegar memorial de solicitud de requerimiento de medidas cautelares, decretadas en el proceso referido, para su consecuente tramite; de antemano agradezco la acostumbrada atención.

Atentamente,

JUAN CARLOS OSORIO MANRIQUE

Apoderado Judicial

CLINICA PUTUMAYO S.A.S.

Doctor

JULIO CESAR RIASCOS TORRES

JUEZ SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE PUESRTO ASIS

E. _____ S. _____ D. _____

Asunto: Proceso Ejecutivo Singular de la **CLINICA PUTUMAYO S.A.S.** contra **ARL SURA SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SOAT**
RADIC. - 2020-00078-00

JUAN CARLOS OSORIO MANRIQUE, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Neiva, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi correspondiente firma y actuando en condición de Apoderado Judicial de la parte demandante dentro del proceso de la referencia, previo reconocimiento de la personería adjetiva; muy comedidamente me permito solicitar al señor Juez, se sirva **REQUERIR** a los señores Gerentes y/o quienes hagan sus veces en las entidades Bancarias, **BANCOLOMBIA, BANCO POPULAR, BANCO DE OCCIDENTE, BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, BANCO BBVA, BANCO DAVIVIENDA, BANCO AV VILLAS, BANCO CAJA SOCIAL, BANCO DE BOGOTA, BANCO SCOTIABANK COLPATRIA, BANCO COOMEVA, BANCO COLPATRIA, BANCO SUDAMERIS, BANCO COOPCENTRAL, BANCO PICHINCHA S.A., BANCO DE LA MUJER, BANCO ITAU, BANCO GNB COLOMBIA, HELM BANK, BANCO WWB S.A., BANCO PROCREDIT Y BANCAMIA**; para que con arreglo a lo dispuesto en el inciso 2º del numeral 4º del artículo 593 del Código General del Proceso, acaten el cumplimiento de la medida cautelar ordenada por su despacho de manera **INMEDIATA**.

Lo anterior y en razón a lo establecido por el artículo 594 del C.G.P. citado por la mentada entidad bancaria “En el evento en que por Ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia. La autoridad que decreto la medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario no recibe oficio alguno, se entenderá revocada la medida cautelar.” (Resaltadas mías)

Además de lo anterior y como presupuesto legal, se tiene que el inciso 2º, numeral 3º del artículo 594 del Código General del Proceso, admite que se podrán embargar los bienes destinados a un Servicio Público –como el de la salud- cuando sea prestado por los particulares, tal y como en este caso acontece; ya que los dineros que se solicitan embargar, no son Rentas ni Recursos que formen parte del Presupuesto General de la Nación ni del Sistema General de Participaciones como se explica en la sentencia que se citó, sino que son recursos girados a una entidad de derecho privado como lo es **ARL SURA SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SOAT**, destinados a cubrir y/o pagar las obligaciones derivadas del servicio de salud que justamente son las que en esta demanda se ejecutan en su contra; es decir, que las sumas ejecutadas en este proceso judicial corresponden a servicios de salud prestados a ARL SURA SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SOAT, y por lo tanto la medida que se solicitó dar aplicación en el oficio dirigido a los Bancos antes mencionados, debió acatarse de manera inmediata por esas

Entidades Financieras, sin que hubiese lugar siquiera a proceder de conformidad con el Parágrafo del Artículo 594 del Código General del Proceso; pues, en este caso particular ha operado la excepción al principio de inembargabilidad, toda vez que se configuran los presupuestos legales y jurisprudenciales, en los cuales se sustenta la procedencia de la medida cautelar ordenada.

Quiere significarse con el precepto normativo anterior, que este despacho judicial deberá pronunciarse con el recibo de la comunicación antes indicada, en la cual se informe la procedencia de la medida cautelar decretada y notificada a esa entidad financiera, como quiera que no existe excepción legal alguna respecto de los recursos que se solicitan embargar a la regla de inembargabilidad.

Así mismo, cabe recalcar, de la manera mas respetuosa al honorable despacho que la disposición de la medida ordenada, es procedente su decreto comoquiera que la reiterada Jurisprudencia tanto en el Honorable Tribunal Superior de Neiva¹ como de las altas Cortes, ha indicado que los recursos provenientes del Sistema General de Participación destinados a un servicio público en particular –como es el caso de la salud-, son embargables por créditos correspondientes a obligaciones dinerarias que provengan del mismo sector, sin que sea viable la medida cautelar por otros conceptos como sería por obligaciones provenientes de otros sectores como vivienda, educación, etc., y como se evidencia en este caso no ocurre; ya que lo que debe existir, es una conexidad entre las acreencias ejecutadas que tienen como fuente actividades cumplidas y provenientes del sector salud y los dineros que se solicitan embargar como ocurre en el presente caso, corresponden a la misma actividad, toda vez que lo que se está ejecutando son obligaciones derivadas de prestación de servicios de salud.

De igual manera, el Ministerio de Salud de la Protección Social, adoptó integralmente esta postura a través de la Circular No. 000024 del 25 de Abril de 2016, en la cual insta a todos los administradores y destinatarios de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud, para que acaten lo pertinente cuando sean receptores de una medida de embargo sobre recursos inembargables, siempre que se configuren los presupuestos legales para el efecto y sobre la base de sustentación en la comunicación que se solicita dar cumplimiento a la cautela, tal y como se indica en este oficio.

Por su parte y entratándose de Entidades Bancarias que deban acatar estas medidas cautelares, la Superintendencia Financiera instruyó a todas sus vigiladas a través de la Circular Básica Jurídica Externa No. 029 de 2014 (Numeral 5, PARTE I - TÍTULO IV – CAPÍTULO I), sobre la forma de cumplir debidamente las órdenes de embargo proferidas por las autoridades judiciales y su obligatorio acatamiento por ellas, sin que tales instituciones vigiladas puedan desatenderlas, con la excusa de calificar la ilegalidad de la medida.

¹ Auto de fecha 14 de diciembre de 2011, dentro del proceso ejecutivo laboral seguido por el Hospital San José de Isnos contra Emcosalud EPS, Auto de esa misma fecha, dentro del proceso ejecutivo laboral seguido por el Hospital Arsenio Repizo Vanegas de San Agustín contra Emcosalud; y, Auto de fecha 7 de febrero de 2012, dentro del proceso ejecutivo laboral seguido por la Empresa Cooperativa de Servicios de Salud “Emcosalud” contra la Caja de Previsión Social de Comunicaciones “Caprecom”, proferidos por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior Distrito Judicial de Neiva.

Precepto que sin lugar a dudas debe acatar las Entidades Financieras que se enuncian, comoquiera que la Superintendencia Financiera en el inciso 2º del numeral 5.1.6. de la Circular Básica Jurídica Externa No. 029 de 2014, en su tenor literal ordena:

“En tal virtud, en los eventos en los cuales el Banco de la República o los establecimientos de crédito reciban órdenes de embargo respecto de los recursos anteriormente mencionados, deberán acatar el mandato judicial, salvo que exista solicitud preventiva o de advertencia por parte de las autoridades de control competentes, caso en el cual la entidad procederá a la inmovilización de los recursos para impedir su disposición por parte de sus titulares, y actuará de conformidad con la instrucción que imparta el respectivo órgano de control”..., cuya advertencia expresa de autoridad de control competente se echa de menos, por parte de la entidad bancaria receptora de la medida cautelar.

Es por todo lo anterior que se solicita con el acostumbrado respeto a ese honorable Despacho Judicial:

Se Imparta con carácter de Urgente **REQUERIMIENTO** oficioso a los Bancos **BANCOLOMBIA, BANCO POPULAR, BANCO DE OCCIDENTE, BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, BANCO BBVA, BANCO DAVIVIENDA, BANCO AV VILLAS, BANCO CAJA SOCIAL, BANCO DE BOGOTA, BANCO SCOTIABANK COLPATRIA, BANCO COOMEVA, BANCO COLPATRIA, BANCO SUDAMERIS, BANCO COOPCENTRAL, BANCO PICHINCHA S.A., BANCO DE LA MUJER, BANCO ITAU, BANCO GNB COLOMBIA, HELM BANK, BANCO WWB S.A., BANCO PROCREDIT Y BANCAMIA**, para que de INMEDIATO se consigne a órdenes de su Despacho, las sumas que se indicaron retener o las que con posterioridad llegaren a existir a favor de la Entidad demandada en la cuenta de depósitos judiciales, conforme les fue ordenados en los oficios radicados en esa entidad Bancaria, en virtud a la excepción legal y jurisprudencial que opera sobre la regla de inembargabilidad de los recursos que se solicitan cautelar.

Por su amable atención, de antemano le expreso mis agradecimientos.

Del señor Juez,



JUAN CARLOS OSORIO MANRIQUE
C.C. No. 12.138.981 de Neiva, Huila.
T.P. No. 89.994 del C.S.de la J.